

LA VIVIENDA ESPAÑOLA EN LOS AÑOS 50

Carlos Sambricio

En otro momento he señalado cómo la reconstrucción de la España destruida tras la guerra se inició, en lo que se refiere a las viviendas destruidas, en torno a 1949. Hasta ese año, la labor de la DGRD fue, básicamente, reconstruir los espacios donde establecer una economía destruida (los núcleos agrícolas pasan de valorarse desde los criterios de una economía natural agraria para entenderse como pautas de una economía agraria de tipo industrial) y la política desarrollada durante los primeros diez años de postguerra poco tiene en común con los planes de reconstrucción de los barrios (de las viviendas) destruidas durante la Guerra. En 1949 se produjo un hecho mas que singular: ante escasa e imprecisa actividad desarrollada por los organismos oficiales (INV, OSH o Patronatos de Casas Militares, de Funcionarios o del Ayuntamiento) a quien estaba encomendada la construcción de viviendas protegidas, los arquitectos -como profesionales liberales- sugerían públicamente la necesidad de establecer una reflexión sobre la vivienda, retomando no sólo el debate que caracterizara la cultura centroeuropea de los años treinta sino estudiando los ejemplos desarrollados en la Europa de la posguerra: en este sentido, la V Asamblea Nacional de Arquitectos dejó de ser la triunfante reunión corporativa que sólo diez años antes convocaran los Servicios de Arquitectura de FET y JONS para ser lugar donde Vallejo planteó la posibilidad de establecer una industrialización pesada en la construcción de viviendas, al tiempo que el Colegio Vasco-Navarro (con el texto presentado por Ricardo Bastida y Emiliano Amann sobre las características que deben definir la vivienda obrera) abría una reflexión sobre cuál debía ser la tipología de la vivienda económica o cuando el Colegio de Arquitectos de Cataluña convocaba un concurso para establecer viviendas de alquiler en el Ensanche barcelonés (en el que Mitjans, Sostres, Maluquer y XXXX obtendrían el primer premio) al tiempo que el COAM convocaba otro, esta vez para viviendas económicas (cuyo primer premio sería Fisac) y el Instituto Eduardo Torroja proponía otro, esta vez de carácter internacional, con vista a establecer tipos viviendas susceptibles de ser llevadas a término mediante elementos prefabricados.

Aquel año, 1949, fue cuando, por vez primera, frente a las pautas oficiales dictadas hasta el momento surgió, a la vista de las nuevas necesidades, una reflexión no tanto sobre el sentido de una posible arquitectura de Estado como sobre la organización de la vivienda en planta, sobre los criterios que debían caracterizar una vivienda económica más que necesaria, a la vista no sólo de las destrucciones existentes sino dado el mas que importante flujo migratorio que llegaba a las grandes ciudades. Tales ideas, por otra parte, se planteaban cuando la prensa española comentaba cuáles eran los ejemplos de vivienda mínima que se llevaban a cabo en otras ciudades europeas, Milán por ejemplo. Y lo que es evidente es que aquellos ejemplos se contraponían claramente a las rígidas ordenanzas sobre vivienda definidas por Fonseca desde el INV.

¿Por qué aquellas ideas no fueron valoradas por la Administración? Cabrían numerosas y distintas respuestas: pero entiendo que la explicación más evidente radica en el escasísimo número de viviendas construidas en aquellos años por los organismos oficiales. Giralt Casadesús comentaba, en su estudio sobre la vivienda publicado por el CAME la necesidad de plantear en 1951 un total de 60.000 viviendas al año entendiendo que la mitad de ellas debían destinarse para ‘productores’ y ‘económicamente débiles’ al tiempo que proponía aumentar la densidad en la edificación (aumentando así la rentabilidad de los capitales invertidos), destacando como si bien en 1940 a cada edificio le correspondían 3,48 viviendas, a cada nuevo edificio de 1947 le asignaba como por el contrario, la cantidad de 4,24 viviendas. Aquella situación se reflejaba en las cifras sobre el total de las cédulas de habitabilidad concedidas por la Fiscalía General de la Vivienda con las realizadas por INV o OSH evidencia la casi nula actividad de aquellos organismos, pudiendo incluso señalarse como las promociones de viviendas públicas publicadas en la época, lejos de ser ejemplos de una más amplia actividad eran, por así decir, las únicas construidas en aquellos momentos. El quiebro se produce cuando, frente a las referencias a la arquitectura regional que se esbozaban en los textos de la DGRD, comenzaban a publicarse noticias sobre la arquitectura californiana o sobre la arquitectura brasileña (publicándose, por ejemplo, artículos de Lucio Costa o las obras de Niemeyer) en un momento en que la discusión sobre los núcleos satélites que se debían establecer en la periferia de las grandes ciudades se planteaba ignorando cualquier referencia a la solución en plan-ta que debía asumirse.

Hasta el momento, los organismos oficiales encargados de dar solución al problema de la vivienda habían visto limitada su actividad tanto por la fuerte limitación de recursos financieros como por las dificultades en la obtención de materiales de construcción; a partir de 1949, la crisis se incrementó debido, sobre todo, a un fuerte incremento en los costos de los materiales así como a un fuerte aumento en la mano de obra. En consecuencia, la necesidad por racionalizar la construcción tuvo como consecuencia una primera coordinación en la definición de la vivienda. Y en un momento en el que la Comisaría de Ordenación Urbana de Madrid (y no olvidemos que la Comisaría de Barcelona se crearía en 1953) centraba su actividad (su presupuesto) en la elaboración de planes parciales en zonas declaradas de utilidad pública, se hace necesario establecer una regulación que cancelara los sistemas de viviendas protegidas y bonificables, confiando la política asistencial de viviendas en el INV; por ello, cuando por vez primera se comienzan a superar muchas de las dificultades económicas anteriores, se hizo imprescindible reformar la legislación, buscando centralizar en un único órgano la política de vivienda económica y la construcción de la misma, pese a la oposición de algunos privados en entregar al INV sus funciones en este terreno. Si hasta entonces la Ley de Arrendamientos urbanos se orientaba hacia el mercado de las viviendas en propiedad, la ley de vivienda de renta limitada reguló tanto los préstamos de la banca privada como fijó el procedimiento para acceder a unos materiales para la construcción todavía escasos en aquellos años. Y buscando desarrollar la idea, no sólo se fijaron aquellas opiniones en la Ley sino que en el Reglamento complementario se introdujeron conceptos tales como normalización, plantas tipo, superficies o costos. Y buscándose eliminar retenciones del sector privado, se definían dos tipos de viviendas: unas, a las que se concedían créditos indirectos (con superficie superior a los 200m²) y otras, definidas para vivien-

das de tres tipo: entre 200 m² y 80 m²; entre 150 m² y 65 m² y un tercer grupo para aquellas definidas entre 80 m² y 50 m². Dicho de otra forma, las viviendas destinadas a la burguesía serían las llamadas viviendas bonificadas y las por el contrario concebidas como viviendas económicas serían las llamadas viviendas de renta limitada, divididas éstas en las llamadas mínimas, reducidas y de tipo social.

Se estableció que la vivienda ‘reducida’ debía tener una superficie comprendida entre los 100 m² y los 60 m², con un costo no superior a las 1000pts/m²; las llamadas viviendas ‘mínimas’ debían tener una superficie comprendida entre los 58 m² y los 35 m², con un coste no superior a las 800pts/m² y, por último, las llamadas viviendas ‘de tipo social’ debían tener una superficie máxima de 42 m², con un coste total no superior a las 25000 pts. Buscándose potenciar la construcción de este último tipo de viviendas, desde el INV se establecían normas claras: no se debía construir en zonas urbanas denominadas ‘artísticas’; se recomendaba alinear los bloques con las curvas de nivel; para evitar composiciones monótonas en fachada, se sugería la posibilidad de organizar retranqueos; se prohibían composiciones pretenciosas, vetándose cualquier tipo de recurso a lo que se denominaba ‘modernidades’ como recursos a la posible ‘arquitectura popular’ y, por último, se señalaba la prohibición de componer grupos de menos de 25 viviendas.

Si en 1949 Bastida y Amann proponían (asignando una superficie por persona que oscilaba en torno a los 12 m², con un total aproximado de 45 m²) extraña ver ahora como la Administración aceptaba unas superficies por persona inferiores a las ratio indicadas, estableciendo incluso unas plantas de 35 m². Entiendo que este cambio tuvo su origen en la influencia que sin duda exigieron los Congresos Internacionales de Vivienda en la persona de Fonseca, arquitecto que coordinaba las propuestas sobre viviendas que elaboraba el INV. Políglota, Fonseca había participado – y seguiría participando – de distintos Comités Internacionales, viajando en consecuencia con una periodicidad y frecuencia nada habitual en aquella España: y cuando muchos de sus compañeros de viaje aprovechaban los debates técnicos para ausentarse y visitar las ciudades donde se celebraba la reunión, Fonseca permanecía, debatía y, como consecuencia de ello, aportaba, a su vuelta a España, una información y unos criterios más que singulares. Sabemos, en este sentido, como hasta 1950 la Ley alemana sobre la vivienda fijaba un máximo de 65 m² y un mínimo de 42 m²: los criterios eran que, para cuatro ocupantes debían existir dos habitaciones mientras para seis ocupantes debían ser tres las habitaciones con un máximo de 48 m². La Ley de Construcción de Viviendas aprobada en abril de 1950 permitía, como señalaban Fischer-Dieskau, Director General de la Vivienda y Alojamiento de la RFA en la revista *Hogar y Arquitectura* nº5, rebajar la superficie mínima de la vivienda, llegando a determinar una superficie de ocupación de 40 m² como mínimo y 80 m² máximo. Y aquella experiencia sería conocida por los arquitectos españoles que en 1951 visitaran la Exposición celebrada en Hannover y vieran en qué medida el debate se centraba en desarrollar y mantener alguno de los esquemas esbozados en los años de Weimar.

Conscientes de las causas que motivaron el fracaso del Plan Nacional de Vivienda formulado por Girón en 1949, en 1954 la norma buscaba dar respuesta a tres aspectos: acceso a los materiales, buscar abaratar la mano de obra

y fijando los beneficios empresariales. Para fijar estos tres aspectos, garantizaba el suministro de materiales, se conservaba la facultad de establecer la expropiación forzosa de los terrenos (tras la posible negativa a vender al INV) y buscaba una reducción de los costos mediante nuevos sistemas constructivos: y en esta línea se proponía la convocatoria de concursos de viviendas entre constructores. Si hasta 1949 las actuaciones desarrolladas por DGRD, INC, DGA o INV suponían un conjunto de reflexiones inconexas e independientes unas de otras, en 1954 se define por primera vez una política y ello se refleja con el nombramiento de Valero Bermejo en el puesto de Director del INV, al morir en accidente Federico Mayo.

En 1954 la primera tarea del Estado era hacer desaparecer las diferencias entre precios y costes de las viviendas: ello suponía definir cambios de naturaleza constructiva y, como señalara el propio Cabrero (la legislación de mayo de 1954 obligaba a rígidas cubiertas de hormigón armado, cámara de aire en los muros, forjador, instalación de sanitarios, tipologías de huecos interiores, impermeabilización de cimientos...) en las *Instrucciones complementarias para la elaboración del proyecto* que se presenta desde la propia OSH, lo que se busca es la economía de la obra, planteándose como tema de debate el número de plantas, discusión sobre si debe recurrirse al bloque cerrado o al bloque abierto, superficie en planta... Y que aquel documento fue norma obligada entre los arquitectos autores de proyectos de vivienda social; lo sabemos por los comentarios que realizara Laviano en *Hogar y Arquitectura*, al destacar como el modelo de cualquier realización posterior debía ser el conjunto de viviendas trazado por Rafael de la Hoz en Montilla (Córdoba).

El proyecto de Rafael de la Hoz, realizado por encargo de la OSH, consistía en un bloque de doble crujía, disponiendo cinco plantas (lo cual, desde la reflexión de Fisac sobre la experiencia nórdica de un máximo de tres, era una clara provocación) constando cada vivienda de tres dormitorios, estancia-comedor-cocina y un cuarto de aseo, además de pequeño lavadero y patio trasero. La planta utilizada por la Hoz podría ser una variación tanto de la denominada planta Amann (la utilizada en los años anteriores a la Guerra en *Solcoeoche*) como a la desarrollada por Fisac en el Concurso de 1949 y luego en el madrileño grupo de Zofio. Lo singular de aquella propuesta radica en la propuesta del arquitecto de un modelo de mobiliario, formado por estructura metálica y complementados en madera.

Son más que numerosos los concursos celebrados en la época sobre mobiliario (sobre ajuares) para viviendas obreras: si hasta poco antes los modelos eran seleccionados por la Sección Femenina, retomando modelos próximos al esquema de lo popular, en 1950 la *Revista Nacional de Arquitectura* había informado sobre el concurso de silla organizado por el MOMA de Nueva York, publicando poco más adelante el proyecto de silla premiado, prototipo presentado por los Eames. Casi desde el primer número de la revista *Hogar y Arquitectura* se publican estudios sobre ensayos de mobiliario para viviendas de tipo social, se describen los ajuares que deben existir en las viviendas de renta limitada, el mobiliario de las viviendas económicas y Poblados de Absorción: la novedad radica en que los modelos que ahora presentan a los concursos españoles de muebles reflejan una clara intención por asumir un diseño moderno, acorde tanto con ejemplos nórdicos como con propuestas americanas. Y que en contraste, por ejemplo, las imágenes que sobre el inte-

rior de las viviendas presenta ciertas publicaciones oficiales (las que edita el Patronato de Casas Militares, por ejemplo) con los modelos de arquitectura que ofrecen revistas como *Informes de la Construcción* o, incluso, *Construcciones*.

El proyecto de Rafael de la Hoz para Montilla tuvo una importancia que la crítica contemporánea no ha valorado todavía en su justa medida. Formado en el MIT, en 1952 había construido un más que singular comercio en Córdoba, desarrollando paralelamente distintos montajes para una sala de exposiciones, y finalmente (y en colaboración con José María García de Paredes), la Cámara de Comercio de Córdoba. Si en su obra demostraba una más que singular sensibilidad, más acorde con la línea desarrollada por *Informes de la Construcción* (una sistemática difusión de la arquitectura californiana, publicando reiteradamente las edificaciones de Neutra y sus discípulos) la Hoz reflejaba asimismo una más que singular formación técnica al publicar en la revista del instituto Eduardo Torroja estudios sobre estructuras, análisis técnicos sobre piscinas, taludes... Aquel Rafael de la Hoz jugó, en los primeros años de los 50, un papel que entiendo debería ser estudiado en profundidad, máxime si tenemos en cuenta que corresponde a los momentos en los que Estados Unidos firma con el gobierno franquista el Pacto Americano, y en consecuencia, la presencia de las bases militares de Torrejón, Zaragoza y Rota, implica la construcción de un importante número de viviendas para los soldados americanos. Sabemos, en este sentido, que R. Neutra visitó en varias ocasiones (cuanto menos en dos) Madrid, por encargo de las tropas americanas, y por conversaciones mantenidas con algunos de los protagonistas de la época, sabemos igualmente dos hechos más que singulares: dependiendo de las pautas marcadas por éste, en las bases se organizaron equipos de arquitectura en los que participaron arquitectos españoles entre los que cabría destacar la presencia de Luis Vázquez de Castro, autor –junto con su hermano Antonio– de distintos proyectos de viviendas sociales o de escuelas para los poblados concebidos en estos años. Tenemos noticias como, igualmente, que el propio Neutra, proyectó una ciudad jardín en Pozuelo, edificándose –según pautas por él definidas– casi 40 viviendas unifamiliares; y aquella actividad no sólo supuso un cambio en la forma de ver y valorar el espacio doméstico sino que trastocó radicalmente la forma de emprender la vivienda de muchos de los arquitectos españoles, máxime cuando sabemos que en las bases existían (dependiendo de los entonces míticos economatos militares) unas grandes naves donde se almacenaban los muebles y enseres que los soldados podían elegir y disfrutar para las casas que les fueran asignadas.

El modelo propuesto por Rafael de la Hoz fue más que relevante si tenemos sobre todo presente que por ley de 15 de julio de 1974 (así como por el Reglamento de 24 de junio de 1955) se asignaba al INV cometidos tan específicos como orientar socialmente la construcción de viviendas; dirigir técnicamente la construcción de las mismas; proteger económicamente la edificación mediante la concesión de beneficios; atraer y fomentar la edificación del privado y, por último, organizar concursos entre empresas. Aquella situación coincidió, por otra parte, con un hecho fortuito, el hasta entonces Director General del INV, Federico Mayo, moría en accidente siendo nombrado sustituto del mismo Valero Bermejo.

El paso de un Director a otro supuso un quiebro en la política de vivienda mantenida hasta el momento: frente a la pobre socialización de la vivienda

mantenida por Mayo, Valero proponía dar entrada al privado y, en consecuencia, se buscó establecer una clara diferencia entre cuál debía de ser el modelo de vivienda destinado a una burguesía capaz de adquirirla (frente a las pautas establecidas con la Leyes de 1944 y 1948 para las llamadas ‘bonificables’) y cuál, por el contrario, las destinadas tanto a la inmigración que invadía la ciudad como para realojar a quienes, sin medios, habían llegado a la misma, situándose en amplias zonas de suburbios. Ante la crisis existente y el desinterés del privado Valero buscó, desde el INV, promover las cooperativas de vivienda al tiempo que buscó hacer obligatorio para las empresas la construcción de viviendas para sus empleados. Era necesario, además, buscar que los chabolistas pudieran, en la medida de lo posible, realizar una contraprestación para la adquisición de su vivienda y por ello en ese mismo año aparecía una Ley de vivienda de Renta Limitada, punto de partida – siempre en 1954 – de un Plan Nacional de Vivienda.

Aquella política se basaba, fundamentalmente, en la experiencia italiana del INA-Casa y, en este sentido, las visitas que los políticos y técnicos españoles realizaron a Italia sirvió no sólo para visitar los ejemplos construidos por Quaroni, Ridolfi o el propio Gardella sino para tomar conciencia de la importancia que tuvo para el país el llamado Plan Fanfani de 1952. Por ello, desde la Obra Sindical del Hogar se propuso un Plan Sindical de Vivienda, buscando repetir las fantásticas cifras esbozadas en Italia. Tras haberse establecido tres categorías de vivienda económica (reducida, mínima y de tipo social) se propuso construir al año 10.000 viviendas de tipo social para sindicalistas de la OSH, estableciéndose créditos del INV por el 80% de su costo a un plazo de 50 años; y a estas condiciones se aprobaba que, además, el Ayuntamiento podía añadir un préstamo del 15% del total, a un interés del 4% a 50 años, de forma que el usuario solo debiese pagar el 5% del total (1250 pts) y luego 45 pts/mes durante 50 años; y, junto con el INV, otras 20000 mínimas y reducidas. Pronto las cifras se dispararon y el optimismo de los políticos fue secundado por la euforia de una prensa servil que difundió el propósito de construir, en diez años, 550000 viviendas de renta limitada: la realidad de aquella propuesta es que apenas se construyó la mitad y la mayoría de ellas correspondían a viviendas de categoría superior.

Cuando en enero de 1955 se presenta a la prensa, como *solución española al problema mundial, realidad industrial en el campo del automovilismo digna de mención* el Biscuter, las opciones que se presentan desde la arquitectura son bien distintas: consecuencia de la política de la OSH, se convoca un concurso en el que sólo Fisac propone una alternativa de interés (la solución de 1949, las llamadas viviendas en cadena) al tiempo que Núñez Mera y Zuazo Bengoa, Carlos de Miguel o Rafael Aburto realizan unas propuestas que poco o nada tienen que ver con las inquietudes de esos años. El concurso fue, a pesar de tener como referencia la propuesta de Rafael de la Hoz, un fracaso al obviar la mayor parte de los participantes la cultura de aquellos momentos: si en los últimos años se había reclamado, de nuevo, la tradición de Oud y la arquitectura holandesa o la experiencia de Jacobsen y la nueva realidad nórdica, en las viviendas experimentales construidas en Villaverde primó la voluntad de originalidad de quienes buscaron una solución en la forma del bloque y no en el análisis de la planta.

Frente a las soluciones alemanas asumidas por los arquitectos de la OSH, los jóvenes que colaboran con Laguna proponen una reflexión distinta, próxi-

ma a Gardella, Oud, Jacobsen... es el momento, conviene tenerlo presente, en que tanto Madrid como Barcelona (al margen de cuanto la heterodoxa historiografía oficial haya establecido) miran el modelo nórdico de una forma que recuerda sin duda ninguna los primeros trabajos dados a conocer en los años 30, cuando tanto A.C. como *Nuevas Formas* o *Re-Co* dan a conocer no sólo distintos ejemplos de arquitectura de vivienda sino los estudios realizados por quienes se interesan en la normalización de los elementos constructivos. Si GATEPAC había informado sobre *nuevas formas de viviendas económicas* y *El Socialista* señalaba la política de vivienda desarrollada en *tres ciudades rojas* (Viena, Zurich y Estocolmo), a partir de 1949 sería Fisac quién comentara las características de las viviendas de Maimo, enfatizando la importancia que debía tener el mobiliario en la nueva vivienda y proponiendo su tipificación.

Si Fisac realizaba aquel planteamiento desde Madrid, Manuel Baldrich (arquitecto director de la Oficina Técnica de la Comisión Superior de Ordenación Provincial de Barcelona) publicaba en la revista *De estudios de Administración Local* un análisis sobre el abaratamiento de la construcción destacando como éste se había logrado en los países nórdicos normalizando los elementos (puertas, ventanas, cocinas) al tiempo que se buscaba normalizar un mobiliario moderno y confortable al alcance de todos los hogares. Impresionado, como él mismo reconocía, por el perfecto acabado de todos los ramos, llamaba su atención la calidad de la cocina y sus instalaciones así como las fregadoras de acero inoxidable, las cocinas eléctricas, las cámaras frigoríficas... Si vivienda y Urbanismo eran referencia fundamentales en aquellos años, la participación de algunos arquitectos (Aalto, Lewerentz, Jacobsen...) se convertían en pautas de una decoración que no tenía ya, en 1948, nada en común con los criterios que Cárdenas definiera en sus estudios sobre mobiliario para las viviendas de la DGRD. En un momento en el que se estudia el significado de la normalización en la vivienda sueca, las notas de Fisac o, incluso, las críticas que Sostres plantea en 1951 frente al pastiche de la Embajada Inglesa en Río, reclamando la disciplina y sobriedad de la arquitectura de Maimo, señalan una línea de reflexión que no ha sido suficientemente estudiada. A Aalto se le dedica, en 1952 (y tras su visita a Madrid) un número monográfico de la *Revista Nacional de Arquitectura* y cuando la misma revista analiza el trabajo publicado por Naciones Unidas sobre la vivienda en Europa se resalta y destaca de forma singular la arquitectura nórdica haciendo hincapié – como había señalado Baldrich – en temas tales como cocinas, cuartos de baño...

El concurso convocado por la OSH en 1954 no satisfizo las expectativas de quienes confiaban en encontrar allí la solución al gravísimo problema de vivienda que ocurría en la gran ciudad: la fuerte avalancha migratoria tenía como consecuencia no sólo el hacinamiento de quienes buscaban alojamiento en viviendas carentes de infraestructura sino que, ante lo dramático de una situación económica, optaban por la construcción de cuevas, chozas y chabolas en núcleos suburbanos que cuestionaban la política de suelo esbozada por la Comisaría de Ordenación Urbana. Buscando dar solución a este problema, conviene destacar como en 1954 Julián Laguna es nombrado responsable de la COUM y, buscando dar solución a corto plazo al problema existente, busca una respuesta inmediata que nada tiene que ver ni por los costos ni por el procedimiento administrativo con la burocrática propuesta de la OSH. Galiana ha

estudiado, en su trabajo *Suelo Público y Desarrollo Urbano de Madrid* la política desarrollada por Laguna: en un momento de inestabilidad monetaria, el proceso de una burguesía preocupada por el crecimiento industrial del país era invertir en un suelo que en condiciones normales debía tener un valor estable y que, en proceso de desarrollo, podía modificarse a corto plazo. Considerando que el arbitrio de plusvalía establecido por el Ayuntamiento era, absurdamente bajo, el problema al que se enfrentaba Laguna era diferenciar conceptos tales como valor inicial del suelo (esto es, intrínseco del no urbanizado) valor expectante (o valor potencial), valor urbanístico (terrenos en relación con el Plan de Urbanización) y valor comercial, entendiendo éste como el valor del suelo por su situación.

Para Laguna, el problema fundamental fue hacer desaparecer el chabolismo y aliviar, en lo posible, las necesidades de vivienda social: buscando adjudicar viviendas en régimen de alquiler a los chabolistas la opción de Laguna fue no sólo la compra masiva de suelo sino, incluso, llegó a esbozar una política de permuta por la cual la COUM se convertía en propietaria de suelo, pudiendo ceder éste – de acuerdo con su política y sus intereses – al INV para la construcción de viviendas. Y buscando conducir y ubicar a la nueva inmigración es como se promovieron los llamados *Poblados Dirigidos*, agrupando distintas promociones en las zonas de actuación.

Consciente de cómo muchos de los acabados de las viviendas del OSH implicaban un alto costo, la opción preconizada por Laguna fue buscar la simplificación de la construcción intentando así que una de las formas de pago en la adquisición de la vivienda fuera lo que Vallejo había definido autoprestación de los futuros ocupantes en la construcción de la vivienda. Y es en este punto cuando el propio Laguna organiza un concurso cerrado de arquitectura en el que invita a participar no ya a los burócratas de la OSH sino a un grupo de jóvenes arquitectos entre los que figuran Oiza, Laorga, Cubillo, Romany, Sierra, Sota o, incluso, Coderch que plantearon en sus propuestas no sólo una nueva distribución en planta de las viviendas de tipo social sino que introdujeron en aquellas viviendas los elementos de debate apuntados en los numerosos concursos sobre cocinas, ajuares, mobiliarios...esbozados por el INV.

1954 supone entonces un singular punto de inflexión en la valoración de la vivienda social en los años de la reconstrucción. Asumiendo la idea de “los momentos cortos” en pocos años acontecen cambios sobre la forma de entender y valorar qué debe ser la vivienda social. A partir de este punto, el efímero protagonismo de la OSH desaparece por completo y será de nuevo, como había ocurrido en 1949, la profesión liberal quien asuma y proponga las opciones sobre la vivienda. El equipo constituido en torno a Laguna (el equipo encabezado por Sierra como gestor y Cubillo, Romany, Alvear, o el configurado por Leoz, Ruiz Hervaz, Vázquez de Castro o Íñiguez) abren una vía que nada tiene que ver con la que a partir de ahora desarrollan los oficialistas arquitectos de la Obra Sindical, entre los que figuran Ambros, Alastrue, Alfonso Taboada, Núñez Mera... De nuevo dos planteamientos antagónicos ofrecen una reflexión y es por ello por lo que en 1956 desde el INV se convoca el Concurso de Viviendas Experimentales.

Entiendo que quien busque comprender cuál fue el debate sobre la vivienda entre 1949 y 1955 obligadamente debe analizar el tema conociendo el deba-

te europeo, analizando las experiencias y políticas desarrolladas en Alemania, Holanda e Italia, contrastando las opiniones y buscando comprender cuánto la presencia de los técnicos que buscaban potenciar la industrialización de la construcción era contraria a las propuestas todavía mantenidas por quiénes, como aquella Sección Femenina que todavía reclamaba una idea de lo popular ligada al sueño de un orden que nunca existió.